

ANÁLISIS DE COYUNTURA¹

(Enero – Febrero – Marzo – Abril 2012)

Marcos Valdés C.
Sociólogo
mrv@mapunet.org

INTRODUCCIÓN

El análisis de coyuntura que a continuación se presenta es una reflexión sobre la situación mapuche en los primeros meses del año 2012. Para lograr este objetivo, se ha abordado el análisis desde una perspectiva multifocal, en la que se considera la situación general de Chile como el eje articulador de la reflexión. Por ello, se dará prioridad al seguimiento de aquellos fenómenos o tendencias de la dinámica sociopolítica que, de una u otra manera y a nuestro juicio, son significativos para la actual coyuntura. Nuestra intención será entonces, contextualizar los acontecimientos más recientes que digan relación con la problemática mapuche.

La razón por la cual se comenzará a hacer este análisis a partir de la fecha propuesta consiste en examinar los hechos a partir de un punto temporal totalmente convencional y no necesariamente dice relación con el aquilatamiento de algún hecho de relevancia política para el presente análisis.

Tendencias y política interna son los ejes analíticos. Estos serán ubicados como parte de un procesamiento en el cual se intenta investigar sobre tendencias históricas profundas, contratendencias y tendencias propias de la situación actual. Así se tomará en cuenta este grupo de variables para intentar llegar a conclusiones en una perspectiva de mediano plazo. El énfasis se pondrá en las tendencias coyunturales y concretamente en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Con todo, no se pretende un análisis puntual de los hechos ocurridos desde 1 de enero al 30 de abril, sino más bien, ubicar en este período los hechos más importantes que permitan arribar a algún tipo de conclusiones respecto del futuro inmediato.

No obstante, se intenta reflexionar teniendo como puntos de referencia al movimiento social por Aysén y también el movimiento estudiantil, ambos movimientos con una actividad política poco usual para el contexto político cotidiano chileno. En este análisis, se ejemplifica como a través de distintas luchas sociales aparentemente desconectadas, no solo hay dinámicas comunes y perspectivas políticas compartidas sino que también se hermanan en como son abordadas por el aparato de estado en cuanto a sus mecanismos de neutralización.

En su conjunto, los análisis de situación que aquí se enuncian, apuntan a la construcción de una interpretación general sobre la evolución de la problemática mapuche durante el

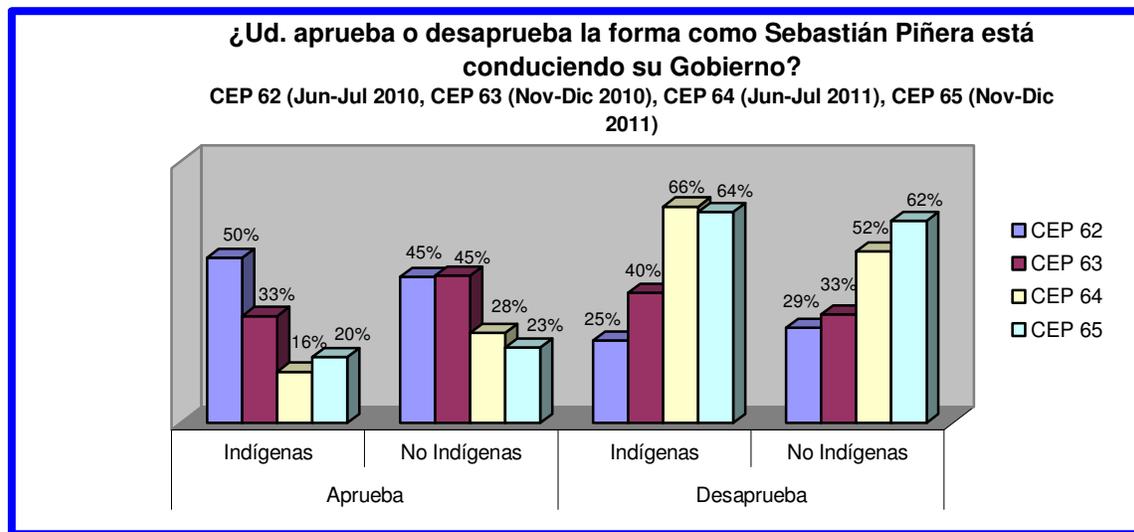
¹ El autor agradece los comentarios críticos de la Dr. Patricia Richards que ayudaron a mejorar el documento.

año 2012, que permita salir del ámbito puramente noticioso que entregan los mass media y los conjuntos de élite de la sociedad chilena.

CONTEXTO NACIONAL.

Quizás el primer hito a examinar son los resultados de la encuesta CEP entregada el 29 de diciembre de 2011. Estos resultados mostraron una baja consecutiva respecto de las mediciones anteriores, que reflejaban la percepción de la población chilena respecto del cómo la administración Piñera estaba haciendo su trabajo ejecutivo, que en la opinión de la población chilena captada por las series CEP mostraba bajas consecutivas y sostenidas. Luego, el contexto social más inmediato está señalado por la percepción negativa de la administración Piñera por parte de la población chilena. Dicha percepción ha provocado una reacción en la población chilena en términos de aumentar la conflictividad social de modo ascendente, que se suma al resultado de una serie de estrategias erradas implementadas por parte de la administración Piñera, el apoyo tácito o explícito a los grupos empresariales de carácter (trans)nacional y la permanente campaña de desprestigio de los grupos que han encabezado las movilizaciones sociales en Chile incluidas las movilizaciones indígenas en general y mapuche en particular, por parte de dichas élites. La evidencia existente hasta ahora, permite afirmar que el carácter de la relación no debería cambiar, y si lo hace será más por la búsqueda y obtención de dividendos políticos que por iniciativa propia.

Los resultados comparados de las encuestas CEP entregan los siguientes guarismos.



Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 62, CEP 63, CEP 64, CEP 65².

Llama poderosamente la atención que la población indígena³ rompe con la tendencia a la baja que venía observándose desde la CEP 62 a la CEP 64. Probablemente este cambio en

² La última encuesta CEP (CEP 65) arroja como resultados un 23% de aprobación y un 62% de desaprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno para la población total.

la tendencia observada se relacione con el tratamiento mediático del conflicto mapuche, en la medida de que este desapareció de la parrilla informativa en el periodo de levantamiento de información de la CEP 65. Naturalmente ello es insuficiente para explicar este cambio de tenencia.

También llama la atención que la desaprobación de la población indígena (64%) a la forma como Piñera ha conducido su gobierno también rompe la tendencia anteriormente observada, pues la desaprobación baja 2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Los datos observados permiten afirmar que la administración Piñera está siendo castigada por ambas poblaciones, tanto en la aprobación como en la desaprobación. Con todo, es la población indígena la que castiga con mayor fuerza la aprobación/desaprobación a la forma como Piñera ha conducido su gobierno.

LA RELACION ESTADO – DEMANDA SOCIAL.

Una de las tendencias que es posible distinguir con mayor claridad en la coyuntura es (1) la criminalización de las demandas sociales, esto estuvo fuertemente presente tanto en el discurso de la administración Piñera como en el actuar de las distintas fuerzas políticas afines a dicha administración política. En efecto, el conflicto de Aysén es una prueba indesmentible de cómo la legítima demanda social fue criminalizada y reprimida de un modo bastante inusual y virulento en un contexto democrático. No obstante, ello se venía observando desde hace mucho tiempo, cuya cara mas visible fue precisamente el conflicto mapuche.

En efecto, la demanda social, cultural y política del pueblo mapuche ha estado sometida a fuertes presiones desde “arriba” que han buscado su deslegitimación e invalidación como estrategia para su anulación política. Para ello frecuentemente se recurrió a la judicialización del conflicto, acusando a los actores sociales involucrados – llámese comunidades mapuche, autoridades tradicionales, etc. - de “terroristas” y buscando aplicar leyes con un alto grado de penalización y mecanismos poco ortodoxos (testigos sin rostro) para su viabilización. Este mecanismo de deslegitimación ha sido una constante en el actuar de este gobierno como en los gobiernos de la concertación.

A su vez, este mismo mecanismo fue posible observarlo en el conflicto de Aysén. La movilización de Aysén afianzó la consideración del ejecutivo y concretamente por parte del ministerio de interior que la estrategia de represión de los conflictos sociales sería más exitosa que una estrategia de negociación “blanda”. Con todo, el diseño de una política de negociación “dura” no tuvo los efectos esperados y por el contrario produjeron serios cuestionamientos y recriminaciones al interior de la coalición gobernante, por cuanto acentuó la percepción negativa de la administración Piñera en todos los sondeos de opinión pública. Produjo además, la salida/dimisión de Rodrigo Álvarez el 27 de

³ En general, todas las muestras CEP es posible diferenciarlas por pertenencia étnica declarada a través de una pregunta específica en el cuestionario aplicado por CEP.

marzo de 2012 como ministro de Energía que fue una salida bastante inusual y ruidosa para el ejecutivo.

La tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las movilizaciones sociales quedó en evidencia, cuando se verifica una fuerte e inusitada represión policial en contra del movimiento aysenino lo cual quedó en evidencia por la cobertura de prensa que recibió el conflicto aysenino. No contentos con ello, el gobierno procedió a iniciar un proceso judicial en contra de sus dirigentes sociales acusándolos de infracción a la ley antiterrorista. Cuestión también visible y establecido como procedimiento standard en el caso mapuche. Cabe mencionar también que al gobierno no le importó que la región de Aysén hubiera votado a Piñera como presidente de la república (58,5%), actuando con total desprecio por el apoyo recibido en las votaciones presidenciales.

Esto tiene una segunda derivada por cuanto la estrategia inicial de negociación “dura” mostró su ineficacia a partir de la búsqueda de diálogo de los dirigentes en Aysén directamente con el ejecutivo saltándose a los emisarios y negociadores iniciales. Este punto de inflexión marcó un cambio de tendencia por cuanto desautorizó la negociación “dura” e hizo entrar en vigencia un nuevo tipo de negociación.

Con todo, hay que dejar en claro que la violencia con que ha sido tratada la población movilizada en Aysén tiene como antecedente la violencia con que FFEE de carabineros han irrumpido en las comunidades mapuche con entera impunidad desde los inicios del denominado “conflicto mapuche”, donde las víctimas más relevantes han sido niños, jóvenes y mujeres. No debe mover a extrañeza la actitud indolente de las autoridades y una parte importante de la población chilena tanto hacia las demandas ayseninas como hacia la violencia producida por las FFEE de carabineros, por cuanto solo constituyen un elemento más del modus operandi habitual en que es tratada la demanda social.

Ahora bien, la diferencia con los gobiernos de la concertación es que la administración Piñera genera un clima de criminalización a *todos* los tipos de movimientos sociales, tanto es así que es posible observar en esta administración la exacerbación de la idea de que “bajo presión, no se puede negociar”.

Para los operadores políticos de la administración Piñera, el cambio de estrategia significó cambiar de foco de atención y negociación sobre un polo de conflicto que entre otras cosas ya estaban poniendo demasiada atención los medios nacionales e internacionales así como la opinión pública nacional e internacional.

No es el objetivo detenerse en el balance de la política de contención de conflicto que lleva a cabo la actual administración, pero sí, analizar si la actual situación de conflicto, en tanto resultado de esa política, puede ser considerada como un éxito/fracaso de estrategia política.

Otra tendencia detectada en el periodo analizado es (2) la emergencia de nuevos liderazgos. En efecto, la fuerza de las movilizaciones sociales permitió el surgimiento de un liderazgo de nueva factura, un liderazgo caracterizado por su juventud, de escasa o

reciente experiencia política y con redes disociadas de las redes clásicas del poder. En el caso mapuche, Natividad Llanquileo mostró una coherencia política que conjugaba juventud, tenacidad y claridad política no fácilmente detectable en liderazgos mapuche anteriores. Lo mismo es aplicable al movimiento estudiantil (Jackson, Vallejo y otros) y el movimiento aysenino (Iván Fuentes). Estos nuevos liderazgos tienen en común la fuerte crítica hacia el modelo político tradicional enmarcado dentro del sistema binominal y la crítica al modelo de perpetuación de élite que aquí denominaremos autopoiesis, demasiado común en el sistema político chileno.

Conviene detenerse un poco en lo anterior. De las dos grandes críticas de estos nuevos liderazgos la más elemental es la crítica al sistema binominal, por cuanto existe consenso de que es un mecanismo espurio y que introduce distorsiones evidentes en el sistema político al dicotomizar en dos grandes bloques el universo político. Pero la crítica de mayor envergadura y con profundas consecuencias para el sistema político es precisamente la crítica a su modelo de reproducción o autopoiesis.

En efecto, la autopoiesis – neologismo introducido por Maturana y Varela en 1971- es un mecanismo de reproducción de los sistemas que permiten una continua producción de sí mismos. Este tipo de autopoiesis que es posible observar en el ámbito político chileno se comporta como un sistema cerrado con poco/nada de inputs. El resultado de un sistema de esta naturaleza es que es posible comenzar a verificar una serie de “malformaciones genéticas” que se repiten en el tiempo tales como, corrupción, perpetuación, “apernamiento”, nula o escasa renovación en los rostros y nombres políticos, repetición de ideas y mecanismos, etc.

El nuevo liderazgo social es sensible a aquello por cuanto parte de una observación de la realidad: los mismos de siempre se rotan el poder una y otra vez, sea del partido que sea y sea de la coalición que sea y ello es transversal y ampliamente utilizado por los actores políticos. Los nuevos liderazgos se preguntan sobre la validez política y ética de aquello, cuestión que ellos no comparten. Luego, para profundizar la democracia ello debe cambiar. ¿Cómo se cambia?. Es la segunda derivada. No obstante, la crítica a este sistema de perpetuación política autopoietico constituye una estocada al corazón mismo del sistema político que es lo nuevo aportado por este nuevo liderazgo.

LA DINAMICA SOCIOPOLÍTICA CHILENA - MAPUCHE.

En la primera semana de enero se produjo en la zona del cluster forestal una serie de incidentes aparentemente vinculados que dicen relación con incendios de tipos forestales. El gobierno movilizó la opinión en todos los medios de prensa que estos incendios eran intencionados y coordinados y de que existía una suerte de coordinación megaterritorial que provocaba la simultaneidad de los sucesos incendiarios. A pesar de las opiniones y evidencias discrepantes, tanto parlamentarios como dirigentes políticos de derecha y por supuesto el ejecutivo se apresuraron a culpar a grupos de “mapuche” exaltados y específicamente a la CAM (Coordinadora de comunidades en conflicto Arauko-Malleko). Evidentemente las pruebas de aquello distaron mucho de la realidad y efectivamente no se encontraron más pruebas que opiniones sin fundamentos.

Tal fue el impacto mediático de dichas afirmaciones que motivó al programa de derechos indígenas de CHILE21 presentar un recurso de amparo preventivo en contra del ministro Hinzpeter el cual fue acogido a trámite el 19 de enero. Como era de esperarse el recurso fue rechazado por cuanto en opinión de la corte de apelaciones los dichos del ministro Hinzpeter no constituirían amenaza.

Independiente del resultado del fallo judicial, es necesario hacer una reflexión sobre aquello ya que lo que estaba al fondo del recurso no eran los dichos en particular sino que cuestionaba el mensaje en función del poder de quién emitía dicho mensaje: en efecto, no es lo mismo que una autoridad diga algo, que una persona en particular diga lo mismo por el elemento distintivo: cual es; *el poder*. Es decir, como este se utiliza y para qué fines. La corte decidió que los dichos del ministro Hinzpeter no constituían amenazas pero no dilucidó si Hinzpeter mal utilizó o no el poder que el cargo le confiere al emitir sus dichos. Probablemente aquello era esperable toda vez que la corte de justicia es también parte de la estructura de poder y por lo tanto un fallo en contra implicaría la apertura hacia una crítica del estado con resultados totalmente inciertos para dicho estado.

En paralelo, surgieron hipótesis sobre autoatentados, procedimiento que ya habrían sido utilizado en el año 1999⁴ por las forestales en plena crisis asiática. Estos autoatentados estarían destinados a cobrar seguros que de otra manera no podrían ser cobrados. Entonces, los incendios provocados tendrían una doble consecuencia: primero, permitirían cobrar seguros. Segundo, permitirían un efectivo control de plagas.

En las primeras semanas de enero se conoció públicamente lo intensivo y extensivo de la plaga de la avispa taladradora (*Sirex noctilio*) que afectaba las plantaciones de pino radiata desde el Maule hasta Chiloé. Plaga que aún no ha sido controlada y que han limitado la expansión forestal, han puesto en alerta al mercado internacional y se han rechazado los sellos de producción que la comunidad internacional impone a la producción maderera chilena.

⁴ “Por esos días, (primeras semanas de Marzo), la quema intencionada de los bosques de pinos, atentados incendiarios en contra de propiedades de las forestales, cortes de caminos y puentes, se sucedían con extraordinaria frecuencia y fueron rápidamente atribuidas a las comunidades movilizadas sin más pruebas jurídicas que ese hecho, sin embargo, estas acciones analizadas desde un punto de vista estratégico será más beneficiosa para las forestales que para las comunidades reunidas en torno a la Coordinadora de Comunidades mapuche en conflicto Arauko - Malleko. La razón es simple, ya en esa época había una fuerte contracción del impulso económico y las primeras señales de la recesión mundial, producida por la crisis asiática, se hacían sentir en Chile, se desaceleró la economía y las exportaciones sufrieron drásticas disminuciones, se produjo un sobrestock de madera y los precios bajaron ostensiblemente, dado ese cuadro, sumado a los conflictos en curso, motivaron a la forestales a buscar caminos que les pudieran redituar algún grado de ganancia en este contexto poco auspicioso; acusar a las comunidades mapuche en conflicto de los incendios forestales intencionados y las acciones de fuerza, les fue más que útil en ese contexto. Lo que les permitió (a las forestales) cobrar los seguros comprometidos y de paso obligar al aparato de estado a buscar culpables dentro de las comunidades mapuche”.

<http://www.mapunet.org/mapunet/coyuntura/coyuntura1.htm>

Ver también: <http://www.gamba.cl/?p=15807> y <http://www.elciudadano.cl/2012/01/09/46803/historia-de-los-autoatentados-de-la-forestal-mininco-en-los-incendios-de-1999/>

Otra tendencia detectable en la coyuntura ha sido la (3) ausencia de cooptación de dirigentes sociales: por cierto, la cooptación – entendida como método de captación de simpatías o lealtades políticas a cambio de prebendas políticas e incluso económicas, tiene por función el mantenimiento de las directrices de la clase dirigente en desmedro de la voluntad de las mayorías – funciona en sistemas de democracia representativa en donde hay un pequeño grupo de dirigentes que tiene la representación de un segmento de población políticamente activo y cuya dirigencia actúa en representación de esta. Si lo anterior es cierto, es posible concluir, que en la actual dirigencia emergente aquello no se verifica, cuestión que si sucedió en los gobiernos de la concertación. Probablemente haya 2 razones que explique lo anterior:

1. La nueva dirigencia emergente no comparte los ideales políticos de derecha.
2. La nueva dirigencia emergente muestra desconexión con los mecanismos de la acción política actual y la acusa de anquilosada, perpetuista y recuerda con mayor fuerza la herencia dictatorial de Pinochet.

Probablemente, si hubiera operado la cooptación de dirigentes en la actual coyuntura, los indicadores de conflicto estarían más atenuados.

En este esquema de ausencia de cooptación se dio el proceso de elección de consejeros de CONADI en las primeras semanas de enero, proceso eleccionario que se repite cada 4 años por ley. La competencia consustancial al proceso eleccionario reveló intentos por parte de la derecha de colocar algún representante en el consejo afín a su gestión – específicamente la denominada “mesa del Ñielol” -, tentativa que al final del día resultó fallida, dando como resultado una composición política distinta del gobierno, puesto que todos los candidatos electos en ese momento no son de derecha.

Por otro lado hay que tener en cuenta que las negociaciones son un escenario privilegiado de la democracia representativa a través del cual en forma directa o indirecta, se expresan todos los actores políticos y sociales involucrados en este caso, el conflicto mapuche. Éstas tienen enorme importancia, porque de sus avances, retrocesos o (auto)marginaciones han dependido hasta ahora, el rumbo de los acontecimientos. No obstante, el gobierno del presidente Piñera ha mostrado serias deficiencias políticas para operar estos mecanismos.

CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO MAPUCHE.

En los primeros meses analizados, se consolidó el escenario de neutralización de conflicto que partía de la necesidad del gobierno de vincular las acciones del movimiento mapuche con acciones delictuales y como expresión de pequeños grupos radicalizados, puesto que ya los mecanismos de negociación generados desde el gobierno de Piñera (mesa del Ñielol) perdían rápidamente su vigencia con el agravante de que la violencia empleada en contra de las comunidades movilizadas fue aún mayor y las FFEE de carabineros sintieron que podían actuar con mayor virulencia e impunidad que en los escenarios sociopolíticos anteriores.

La violencia empleada por las FFEE de carabineros fue detectada por organismos de derechos humanos que denunciaron pública e internacionalmente la actividad represiva de las FFEE de carabineros, cuestión mucho más abusiva para los niños y mujeres mapuche de las comunidades. Este eje articulador en tanto estrategia de neutralización puede denominarse como de regresión política, puesto que deshace de un plumazo, por la vía de los hechos, acuerdos internacionales vigentes sobre derechos humanos.

Particular atención debe centrarse en fuerzas paramilitares que operan en la zona de conflicto bajo eufemismos tales como “guardias forestales”. Estas brigadas han tenido un desempeño que no tienen que ver con finalidades de “observación y disuasión” sino que operan como fuerzas de apoyo de las FFEE de carabineros y en general actúan virtualmente como servicios auxiliares en tanto prestaban apoyo logístico y de inteligencia. Cuestión claramente irregular y que señala una metodología de trabajo oscura e ilegítima.

Las características de la intervención policial de zonas en conflicto fueron mas bien militares que de orden público puesto que se verifica el establecimiento de un régimen militar de ocupación; retenes móviles, vuelos rasantes de helicópteros, hostigamiento, seguimientos, allanamientos, detenciones arbitrarias y escuchas telefónicas y hasta robos en completa impunidad serían por esos días pan de cada día.

Es evidente que en el clima de inestabilidad que se ha creado producto del mal manejo político del conflicto por parte del gobierno, la tendencia a generar focos de violencia iría en progresivo aumento, esto fue lo que precisamente ocurrió en los primeros días de marzo.

Llama la atención el nulo pronunciamiento de agrupaciones de trabajadores, (CUT o sindicatos de trabajadores independientes, ni de cuerpos colegiados, ni de organizaciones estudiantiles) ni de partidos políticos de oposición condenando abiertamente el clima de violencia en contra de las comunidades, mujeres y niños mapuche. Cuestión un tanto diferente con otros movimientos sociales tales como el movimiento social por Aysén.

Los hechos y posiciones políticas que plantean la posibilidad de superación del conflicto, en términos de superar las contradicciones históricas se hacen cada vez menos palpable, puesto que subsisten aún, posiciones que se resisten a enfocar la problemática mapuche desde una perspectiva más horizontal, de modo que puede considerarse el conflicto mapuche todavía como un problema inconcluso y regresivo. Éste es el rasgo principal de la coyuntura analizada.

ANÁLISIS INTEGRADO A MODO DE CONCLUSIÓN.

Evidentemente las conclusiones posibles de arribar son muy preliminares, además del hecho que este análisis está basado en los acontecimientos de los primeros meses del primer semestre de 2012, sin embargo, es posible afirmar de entrada que el gobierno en principio no ha sabido como reaccionar frente a la complejidad de los conflictos sociales

y en el proceso ha ensayó una serie de mecanismos que han dado como resultado suma cero o negativa.

Si algo ha quedado claro en el análisis de coyuntura de los meses anteriores es que, la inmensa brecha entre actores sociales y gobierno se ha mantenido o ensanchado. El modelo neoliberal fundado por Pinochet, administrado por los gobiernos de la Concertación y profundizado por el gobierno de derecha, se ha ido consolidando y legitimando en casi todos los actores sociales.

Salvo raras excepciones, tales como los movimientos sociales de carácter regional y territorial, ecologistas y otros, son muy pocos los actores que tienen posiciones políticas distintas en cuanto a la validez del modelo neoliberal y su implementación. Esta realidad (la aceptación del modelo neoliberal como realidad a lo menos incuestionable) está en la base de las negociaciones pero que lentamente están siendo cuestionadas por distintos actores, siendo los pioneros en aquello con largueza los pueblos indígenas a lo largo de Chile.

También explican el paso del cuestionamiento político al enfrentamiento cuasi - militar con que el gobierno de Piñera ha respondido a las movilizaciones sociales, cuestión aplicable a cualquier movilización incluso no mapuche. También explican, el reacomodo de las estrategias políticas y la emergencia de nuevos actores y referentes políticos cuya informalidad pero evidente peso político cuestiona la institucionalidad política vigente. Cómo se reacomodan, coexistan y generan políticas de alianzas este conjunto de fuerzas y sus aliados reales y potenciales, será lo que tendrá mayor incidencia en el ámbito político en el futuro inmediato.

El reacomodo de estrategias bipolares (el gobierno en tanto bloque dominante y un otro cualquiera: movimiento mapuche, movimiento estudiantil, etc.) para buscar hegemonía y legitimidad en la sociedad civil, ha resultado poco efectiva en este objetivo. En este contexto, el movimiento mapuche muestra claros indicadores de aislamiento comunicacional y político, cuestión que no se avizora como remediable en el corto plazo.

Esta perspectiva, también comienza a ser parte de la cotidianidad de amplios sectores de la sociedad chilena, que se expresa a través de una percepción generalizada de que el conflicto mapuche es un hecho aislado y fundamentalmente gatillado por la pobreza.

Si en los años ochenta fue el proyecto de las fuerzas populares lo que marcó y dio el tono a la dinámica mapuche, actualmente, el proceso de suscripción del modelo de mercado, impulsado por los grupos empresariales, legitimada por los gobiernos de la concertación, pero siendo intensamente profundizado y con mayor celeridad por el actual gobierno de derecha, será la que marcará las relaciones entre unos y otros. Por su parte, los grupos empresariales, asumirán un papel protagónico a nivel estatal no antes visto después de recuperada la frágil democracia chilena, en términos de protagonismo e influencia sobre el actual gobierno.

No obstante, en lo inmediato, las propuestas neoliberales aparecen como las únicas con viabilidad estatal, pues las fuerzas políticas que las sustentan tienen partidos políticos organizados, apoyo social (que les permitió ganar las elecciones después de casi 50 años fuera del poder democrático) y apoyos de los organismos financieros internacionales.

No hay, hoy por hoy, un proyecto alternativo estructurado ante el neoliberalismo, salvo la resistencia de minorías políticas que parecen irrelevantes en el concierto actual, con excepción de las propuestas del movimiento mapuche y estudiantil que en todo caso no son propuestas de carácter global y con repercusiones nacionales aún por dilucidar, en términos de viabilidad político - electoral.

Lo que ha enseñado este período para las organizaciones mapuche, es que en primer lugar, los aliados estratégicos no son conglomerados políticos formales sino que provienen de personas que no se expresan colectiva ni orgánicamente. Como canalizar este apoyo para la causa mapuche, será una de los desafíos más relevantes para el movimiento mapuche. En segundo lugar, nuevas herramientas han sido incorporadas a la lucha reivindicativa mapuche, una de ellas, son los medios de comunicación, especialmente aquellos alternativos a los mass media, tales como las redes sociales y el uso de Internet como mecanismo de propagación de ideas e información. El futuro irá indicando como va evolucionando el uso de estas herramientas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los actores que concurren al conflicto y los proyectos políticos en pugna no son similares, en tanto también los objetivos de las negociaciones en cuanto a alcance político, plazos, ritmo y estilo son diferentes. De hecho, el gobierno insiste en que la solución del conflicto mapuche es un problema de pobreza, los actores mapuche por su parte, repiten frecuentemente que el problema es mayor y que es superado por este factor.

El procedimiento de neutralización del conflicto merece otra mirada. A finales de febrero y casi producto de los hechos incendiarios el gobierno de turno nuevamente comienza a reutilizar las versiones de "infiltraciones" de izquierda y de grupos guerrilleros tales como las FARC. Versiones que nunca han podido ser verificadas ni demostradas. En este contexto, la profundización de la crisis provocará en el gobierno, un deterioro de su imagen internacional y una baja sostenida en la opinión pública acerca de su desempeño.

Desde una perspectiva teórica, la neutralización del conflicto parte de la consideración de que existe un conflicto entre dos proyectos político - sociales antagónicos, ambos con determinadas cuotas de legitimidad y legalidad. Por tanto, la negociación no busca agregar uno a la institucionalidad del otro, sino para lograr la disolución del conflicto por la vía del aniquilamiento del otro polo, que en general, es el menos proclive al polo con mayor poder formalizado. Caso absolutamente aplicable a la problemática mapuche.

Independientemente de aquello, la preocupación del gobierno en esta etapa será definir actores proclives a una negociación con el estado, definir sus perfiles y capacidad orgánica, así como definir los procedimientos y el contenido de una futura agenda de

negociación. En cualquier caso, las organizaciones mapuche han sido claras al respecto: "mientras no esté negociado todo, nada está negociado".

Por último, resta decir que en lo que va de los meses analizados, el conflicto se ha mantenido con oscilaciones, pero en ningún caso, se ha superado y las señales de solución no se avizoran en el horizonte inmediato.